

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, cuatro (04) de junio de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTES	: DORA CECILIA DIOSA HERRERA
DEMANDADOS	: CASAGRANDA CONSTRUCTORES S.A.S
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-088-31-05-001-2017-00767-01
RADICADO INTERNO	: 094-21
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 141

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve los recursos de apelación en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el **Decreto 806 de 2020**: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante, solicita se declare que, entre la demandante y el demandado, la sociedad Casa Granda Constructores S.A.S existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido, que tuvo vigencia entre el 24 de noviembre de 2014 hasta el 15 de febrero de 2016; se declare que la terminación de la relación laboral entre la accionante y la demandada se dio sin justa causa y en consecuencia se condene a la parte demandada a cancelar a la demandante la indemnización establecida en el art. 64 del C.S.T, se condene al pago de la prima de servicios, de las prestaciones sociales y vacaciones de acuerdo a la vigencia de la relación laboral entre el 24 de noviembre de 2014, hasta el 15 de febrero 2016, al pago de los aportes al sistema general de la seguridad social integral durante la relación laboral, al pago de la indemnización

moratoria causada por el no pago de prestaciones sociales a la terminación del contrato al tenor del art. 65 del C.S.T, al pago de la sanción moratoria por la no consignación de cesantías en un fondo privado desde el 24 de noviembre de 2014 al tenor del art. 99 numeral 3 de la ley 50 de 1990 y se condene en costas procesales al demandado.

Fundamenta sus pretensiones en que la señora Dora Cecilia Diosa Herrera, en calidad de contratista, y la sociedad Casa Granda Constructores S.A.S, en calidad de contratante, celebraron un contrato inicial de prestación de servicios el día 24 de noviembre de 2014, hasta el 30 de junio de 2015, la accionante devengaba como contraprestación básica del contrato inicial la suma de \$7.600.000 mensuales. Celebraron un segundo contrato de prestación de servicios el día 01 de julio de 2015, hasta el 31 de enero de 2016, y devengó como contraprestación durante el tiempo de vigencia del contrato la suma de \$7.600.000 mensuales. Se celebró un tercer contrato el día 02 de febrero de 2016 hasta el 15 de febrero de 2016, por el cual devengó la suma de \$4.500.000. La demandante se desempeñó en el cargo de ingeniera, y era la encargada de la construcción de la unidad residencial San Ángel Etapa 1 del municipio de Copacabana, y solo para esa construcción fue contratada.

La sociedad demandada aparte de la construcción de la unidad residencial San Ángel Etapa 1, se dedicó a los acabados de la casa de Luis Ángel Machado y del alcalde, y para ese propósito encargaron a la demandante, sin mediar contrato alguno, solo cumplía órdenes del demandado. Estas labores tuvieron una duración 11 meses en la casa de Luis Ángel Machado, desde el 4 de agosto de 2015 al 15 de julio de 2016 y en la casa del alcalde de Copacabana 3 meses aproximadamente. La demandante prestó su servicio personal y subordinado a las órdenes del demandado durante toda la relación laboral, cumplía con horario de lunes a sábado desde las 7 am, hasta las 5 y 30 pm, incluyendo una hora de almuerzo. Si bien hay varios contratos de prestación de servicios, la accionante cumplía con los elementos del contrato de trabajo. El demandado omitió la obligación de afiliar a la accionante al sistema general de seguridad social integral. La sociedad demandada terminó la relación laboral sin mediar justa causa el 15 de febrero de 2016. La demanda se encuentra en mora de pago de prestaciones sociales (cesantía, interés a la cesantía y prima de servicio) y vacaciones correspondientes a todo el tiempo de vigencia de la relación laboral, así como los aportes al S.G.S.S.I. el demandado tampoco canceló o consignó al fondo el valor del auxilio de cesantías, estando en mora por ese concepto desde el 15 de febrero de 2003, y ha omitido la obligación de enviar paz y salvo y constancia de pago de aportes al S.G.S.S.I a la accionante.

CONTESTACION DE LA DEMANDA

A través de curador se dio respuesta a la demanda aceptando los contratos de prestación de servicios suscritos por las partes, los honorarios pactados como remuneración, según la prueba allegada al proceso y no acepta que el demandado haya dejado de cotizar a la seguridad social toda vez que según los contratos de prestación de servicios esta era una obligación de la parte. Frente a los demás hechos manifestó que no le constan y que por lo tanto deberá ser objeto de prueba en el proceso.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 19 de octubre de 2020, el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, declaró que entre la señora Dora Cecilia Diosa Herrera y Casagrande constructores S.A.S existió un contrato de trabajo que inicio el 24 de noviembre de 2014 y terminó el 15 de febrero de 2016. Condenó a la demandada a pagar a la señora Dora Cecilia Diosa Herrera los siguientes conceptos: Cesantía \$9.402.273, Intereses \$1.128.328, Prima de servicios \$9.402.273, Vacaciones \$4.701.366 para un total de \$24.634.240; condenó en costas procesales a la demandada y se fijó por agencias en derecho la suma de \$2.400.000. Absolvió a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra conforme a las consideraciones expuestas.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de la parte demandante manifestó su inconformidad frente a los dos ítems, el despido con justa causa y la indemnización moratoria por el no pago oportuno de las prestaciones sociales. Frente al primer asunto, esto es, al despido injusto indica que los testigos en sus declaraciones afirmaron que el flujo de caja de la unidad san ángel se encontraba en quiebra, que no tenían los dineros para pagar a los trabajadores y por eso fueron despidiendo a todos los trabajadores, de igual manera lo dice el constructor Norbey, que despidieron a la gente y no sabían por qué, pero indica que el asunto intrínseco en el despido fue la falta de flujo de caja, frente a esa justa causa por el despido. Frente a la indemnización por el no pago de prestaciones sociales indica que es evidente que Casagrande actuó de mala fe, tanto que hizo que ella firmara unos contratos de prestación de servicios para evadir las prestaciones sociales, precisando que según las reglas de la experiencia y sana crítica enseñan eso, esto es, que se utiliza por parte del empleador un

contrato de prestación de servicios, para el no pago de las prestaciones sociales como ocurrió en el asunto debatido. Indica además que el hecho de no hacerla firmar un contrato laboral era para eximirse del pago de las prestaciones sociales, por lo que es evidente la mala fe del empleador. Frente al pago de las cotizaciones, indica que el juez de instancia, en materia laboral puede fallar extra y ultra petita, y por lo tanto las afiliaciones cuando se hace la liquidación en el proceso ejecutivo laboral, puede detallar las prestaciones o el pago de cotizaciones que hizo la demandante, razón por lo que solicita al revocar la decisión frente a esos dos ítems, despido con justa causa y a la indemnización por el no pago oportuno de las prestaciones sociales.

El apoderado de la parte demandada manifestando que comparte con el juez la credibilidad que deben tener los contratos firmados, y que en los mismos se ve que las funciones y actividades asignadas a la contratista eran de gran complejidad, y por lo tanto implicaban su permanencia en el lugar de trabajo durante la correspondiente jornada. Que por lo tanto debido a la complejidad de las funciones implicaba que no podían ser desarrolladas de forma intermitente, como que la contratista estuviera una hora en el lugar del trabajo y volver a las 4 horas, o que no fuera cotidianamente a cumplir con las funciones asignadas en el contrato de prestación de servicios. Que el servicio prestado era de tal superioridad que la cláusula 6 de supervisión implicaba su permanencia permanente para desarrollar esa función, por lo que indica que dicha función no se podía desarrollar desde casa, pues reitera que ello implicaba la permanencia de la contratista en el sitio de trabajo hasta que terminara la jornada. Así mismo expresa que los testigos no fueron contundentes, pues indica que habrían sido así si fueran compañeros de trabajo, subordinados que acompañaban a la contratista durante toda la jornada, refiriendo que los dos testimonios de las dos señoras eran testimonios que comunicaban lo que sabían de boca de la demandante, por lo que no se les puede asignar un carácter de credibilidad dada su espontaneidad y por ello considera que no está probada la existencia de un contrato laboral, y por ende la subordinación de la demandante con su contratante.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la parte demandante presenta alegatos de conclusión manifestando en síntesis que según esta el despido si se encuentra demostrado con los testimonios pues indica que la señora NORELA CASTRILLON, en los audios a minuto 16.38, 1750, 24.13, 2718, afirmó que

durante seis meses no habían cancelado los salarios a la señora DORA CECILIA, que fueron despidiendo a todos los trabajadores de la obra SAN ANGEL, sin haber terminado las zonas comunes, no sabe además que pasaba con los dineros por la compra de dichos apartamentos de la obra. Que además CLEMENCIA RIVERA dijo en los minutos 42.15, 48.23, que echaron a la señora DORA CECILIA, porque les estaba pasando información a las propietarias de que les estaba envolotando el dinero por la compra de los apartamentos, ya que la sociedad CASA GRANDA , les daba dos números de cuenta diferente para consignar los dineros que abonaban para la compra de estos, además que cada quince días despedían la gente, reduciendo el número de trabajadores, para la terminación de la obra SAN ANGEL, y con respecto a la sanción moratoria del artículo 65 del C.S.T y de la ley 50 de 1990 indica que si debe condenarse a la misma como se expresó en el recurso de apelación por la mala fe del empleador.

CONSIDERACIONES

El problema jurídico en esta instancia se centra en determinar si existió una relación laboral entre las partes y en consecuencia si hay lugar a acceder a las pretensiones invocadas en la demandada tales como pago de prestaciones sociales, indemnizaciones y cotizaciones a la seguridad social.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

De la existencia y prueba de la relación laboral.

En lo que respecta al requisito establecido en el artículo 23 del C. S. de T. subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990, se tiene que, para que exista contrato de trabajo se debe acreditar 1) “La actividad personal del trabajador”, 2) “La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador”, y 3) “Un salario como retribución del servicio”.

Por ende, es a la parte demandante la que tiene la carga probatoria según lo establecido en los artículos 164 y 167 del C.G.P, de demostrar la **prestación personal del servicio** con el supuesto empleador demandado y que, por ello, recibió una remuneración, además de los extremos temporales de la relación y el salario; tal y como lo ha señalado la Corte suprema de Justicia en sentencia SL5453-2018. Una vez probada la prestación **personal** del servicio nos encontramos ante la presunción del artículo 24 del C.S.T, el cual establece la presunción de que toda relación de trabajo personal está regida por un

contrato de trabajo, **debiendo de esta forma la parte demandada desvirtuar la subordinación para efectos de desacreditar dicha presunción**, tal y como se ha expuesto por la jurisprudencia entre otras en sentencias de la CSJ SL 1905/18, SL 6868/17, SL 878/13 y 42167 del 06/03/12.

Respecto a este elemento esencial del contrato, en su más moderno significado, se ha entendido que es una potestad del empleador de someter al trabajador *“a la esfera organicista, rectora y disciplinaria de la empresa”* (Tomás Sala Franco, Derecho del Trabajo, 8ed., 1994, pág. 181), y como tal se deduce, en las más de las veces, de actos que implican el ejercicio real de estas potestades; y en palabras de la Sala Laboral de la CSJ, la subordinación *“se expresa a través de tres potestades del empleador: la directriz, la reglamentaria y la disciplinaria”* (Rad. 8476; sent. del 24 de octubre de 1996 - resalta la Sala-).

El concepto de subordinación es explicado por el legislador en el literal b) del artículo 23 del CST, como la facultad que tiene el empleador de exigir al trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos. Está prerrogativa debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. En palabras de la Corte Suprema, Sala Laboral, la subordinación es el elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y otros acuerdos convencionales, por cuanto en el primero el empleador determina elementos como: la jornada de trabajo, el salario e imparte órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.

De suerte que alrededor de la subordinación gira la fundamental distinción para determinar si un contrato está regido por las leyes laborales, en contraposición con los estatutos civiles, comerciales o solidarios.

Partiendo de lo anterior considera la Sala que si se acreditó la relación laboral pretendida por la parte actora por lo siguiente.

Obra como prueba documental relevante en el expediente lo siguiente:

Copia de contrato de prestación de servicios suscrito por la demandante y la sociedad Casagrande Constructores S.A.S, desde el 24 de noviembre de 2014 al 30 de junio de 2015. (página 30 y ss del expediente digital), con un pago

mensual de \$7.600.000, en el cual se consagró en su cláusula primera el desarrollo de las siguientes actividades.

- Actualización de planos de obra.
 - Estudio y revisión de planos.
 - Programación del LastPlanner semanal.
 - Estudio de especificaciones.
 - Manejo y control de pagos al Personal de administración de la obra; y de los Contratistas.
 - Seguimiento al manejo de las Reformas.
 - Revisión y verificación de actividades en ejecución; de acuerdo a los planos, especificaciones y calidad contratada. (ACABADOS)
 - Elaboración de cortes a Contratistas de Mano de Obra, y los vales correspondientes. (ACABADOS)
 - Verificación y chequeo de trazos, plomos y niveles.
 - Asignación, verificación y control de instrucciones en el campo; tanto para los Maestros como para los Encargados de los Contratistas y Subcontratistas.
-
- Control del consumo del permisible autorizado por el director (cerámicas, gas, hidrosanitaria, etc.).
 - Presencia permanente en la Obra controlando y verificando la calidad.
 - Control del Personal de Contratistas en la ejecución de actividades.
 - Apoyo continuo al Director en la Planificación y Cronogramas de la Obra.
 - Velar por el buen uso y el mantenimiento; tanto preventivo como correctivo de todos los equipos y herramientas de la obra.
 - Control de los desperdicios en las diferentes actividades. (Informe final, al entregar la Obra, de dichos desperdicios).
 - El pago (vales) de los Contratistas debe ser verificado en cuanto a calidad y cantidad.
 - Debe solicitar al Director, la información para su conocimiento, control y retroalimentación de todos los contratos, en cuanto a cantidades, especificaciones, calidad y alcance de los mismos.

Copia de contrato de prestación de servicios suscrito por la demandante y la sociedad Casagrande Constructores S.A.S, desde el 01 de julio de 2015 al 31 de enero de 2016. (página 19 y ss del expediente digital), con un pago mensual de \$7.600.000, en el cual se consagró en si las mismas funciones descritas en el contrato anterior.

Copia de contrato de prestación de servicios suscrito por la demandante y la sociedad Casagrande Constructores S.A.S, desde el 02 al 15 de febrero de 2016. (página 25 y ss del expediente digital).

Copia de contrato de prestación de servicios suscrito por la demandante y la sociedad Casagrande Constructores S.A.S, el 20 de enero de 2015, para ejecutar la actividad de arquitecto en acabados de obra blanca. (página 36 y ss del expediente digital).

Además de lo anterior dentro del proceso declararon las siguientes personas:

NORELA DEL SOCORRO CASTRILLON MEJÍA, manifestó que vive en Copacabana en el edificio San Ángel, y que conoció a la demandante en el año 2015, cuando fue a comprar un apartamento de la constructora Casagranda, pues ella fue quien le enseñó el apartamento, toda vez que a ella le asignaron darles todas las indicaciones, y que a partir de ahí tuvieron varios contactos cuando por asuntos de la constructora tenían que llevar a cabo algunos asuntos, finalizando el 2015. Sobre la contratación de la demandante y Casagranda, indicó que cuando conoció a la arquitecta le pregunto qué hace cuando trabajaba con ellos, y ella le dijo que hacía unos cuantos meses. Que la veía trasegar hacia arriba, por una loma, porque le habían asignado construir la casa del señor alcalde y del señor Luis Ángel Machado, siendo una tarea que le encomendaron más o menos a principios del 2016. Que entraron más en contacto cuando comenzaron a ver que la obra no se finiquitaba sino al contrario todos los días se iban más trabajadores, iba quedando todo mas solo y las zonas comunes sin entregar, el edificio sin entregar. Que comenzó a ocupar el apartamento en octubre del 2015, en noviembre se instaló y a partir de ese momento inicia el contacto con la doctora Diosa. Que la relación con esta era todo para efectos de la entrega del apartamento, funciones de post venta del apartamento. Que por parte de la constructora quien le daba órdenes a la señora Diosa era el señor Juan David Gil, tales como que ella era quien encausaba a los compradores hacia los apartamentos y los enseñaba, de igual manera le daba órdenes de “vaya lleve materiales con trabajadores y dirija la obra del señor Luis Ángel Machado” era una finca y del señor alcalde. Que sabe eso porque, cuando comenzaba a verla que caminaba hacia allá como se dirigía hacia otras zonas le entro a inquietud y le pregunto qué porque no estaba de lleno en la obra terminando las zonas comunes, y le dijo que le asignaron y todos los días debe ir a terminar la finca del señor machado, por boca de ella. Con respecto al horario indicó que ella ingresaba a las 7 am, muchas veces almorzaba allá no sabe si era porque no tenía tiempo, o porque ella quería, se quedaba hasta las 5 y media y muchas hasta las 9 de la noche, los sábados también se quedaba más o menos hasta medio día. Con respecto a las funciones realizadas por la demandante dijo que conocía muchas, que ella era como todera, porque aparte de sus funciones inherentes a su profesión de arquitecta el señor le asignaba otras funciones como por ejemplo de estar asesorando personal o estar ejerciendo las funciones de los otros en caso que no estuviesen, ella aparte de ser arquitecta era todera. Ella dirigirá el personal que se dirigía hacia las construcciones de las fincas, ella la veía trasegar con sus trabajadores.

CLEMENCIA RIVERA MONTAÑO, vive en Copacabana en el edificio San Ángel. Que conoce a la señora Dora desde el 2014 cuando quiso comprar apartamento en el edificio San Ángel, siendo recibida por la demandante quien le mostró como iba a ser el edificio y que posteriormente decidió comprar el cuarto piso de dicha unidad y que el balcón de su apartamento daba para donde quedaban las oficinas donde ellos llegaban a trabajar y se desplazaban a todas partes. Que en el 2015 pidió otra cita para ir a ver cómo iba a su apartamento, y la demandante fue la que la recibió, le mostró que iba muy adelante y le dijo que si quería cambiar alguna cosa. Que luego la llamaron que tenía cita con la arquitecta para escogiera el color de piso, de la madera y ella volvió y la atendió con su gorro, con herramientas e iba anotando ahí lo que uno le iba diciendo. Que a finales de 2015 la llamaron con ella y le entregó el apartamento, y le dijo que cualquier cosa que no le gustara o daño que la llamara que ella iba a resolverle las situaciones. Que en el 2016 se fue a vivir allá, y veía a la demandante 7 am a 5 de la tarde. Refiere además que desde su apartamento se divisa la casa del alcalde Héctor y se sabe que con palmas es la casa de Don Luis ángel y la veía todos los días que cogía por esa loma arriba, bajaba, venia, el edificio lleno de trabajadores de pintura y polvo. Que tenían contacto con ella, incluso cuando hacía mucho frio como ya se habían llevado la caseta la llamaba a tomar aromática o tinto, hicieron una amistad muy linda, le daba pesar verla con tanto trabajo y que le decía que estaba muy cansada y aburrida porque el contrato era solo por ese edificio y la mandan a hacerle la casa del alcalde y al papa del que era el director de planeación. Que la demandante trabajaba al final de la obra hasta las 8 y 9 pm. Que la persona que le daba órdenes era Juan David Gil Granados, porque ella estuvo sentada en las oficinas que eran de madera y ahí esperando que él le resolviera algunas cosas de sus cuentas y la veía cuando estaba con los trabajadores y vio cuando él le dio órdenes a ella. que no sabe porque dejo de trabajar en el edificio San Ángel, dijo que imaginaba que era porque se dio cuenta que le estaban envolotando su dinero y eso no les gusto a ellos.

NELSON NORBEY GARCIA RAMIREZ, manifestó que es arquitecto y que conoce a la demandante desde el año 2009 por temas laborales en una obra llamada Portovita. Que conoce a constructores Casagrande, porque ellos lo contrataron para que les prestara servicios en la obra San Ángel en el mes de febrero de 2016 mediante contrato a término indefinido para prestar el servicio de residente de obra bajo el mando de la arquitecta Dora Diosa. que estuvo aproximadamente un mes y una semana laborando con ellos, porque debido a las inconsistencias que vio y los problemas de la constructora decidido

renunciar. Que las funciones de la demandante eran como directora de obra que era dirigir todas las labores, y como hacer el tema contractual. Que el horario de la señora Dora Diosa, en la construcción era desde as 7 am hasta 5:30 pm, incluso más porque ella llegaba un poco antes y se quedaba un poco después. Que la persona que le daba órdenes a la señora Dora era el señor Juan David relacionadas con la construcción del edificio san ángel, y recuerda que dora tenía encargado construir dos obras más, dos casas fincas que quedaban cerca de la obra. Esas casas fincas recuerda que una en la que estuvo era del señor Luis Ángel, si bien recuerda, en la otra si no alcanzó a estar ahí, pero dora le contó los temas de detalle que estaba ejecutando en esas obras. Que además la demandante tenía a cargo aproximadamente 25 personas, refiriendo que incluso él era un subordinado de ella

Partiendo de lo anterior, y después de ser valorada en su conjunto con base en las reglas de la **sana crítica y la libre formación del convencimiento** (art. 61 del CPL), se permite la Sala concluir conforme a los contratos de prestación de servicios mencionados y la prueba testimonial relacionada que efectivamente la parte demandante logró demostrar la prestación del servicio por los extremos solicitados en la demanda, esto es, del 24 de noviembre de 2014 al 15 de febrero de 2016, sin que el empleador en momento alguno hubiera logrado desvirtuar la presunción de subordinación, siendo pertinente además indicar que según los testimonios recibidos quedó demostrado que la demandante incluso si recibía órdenes del señor Juan David Gil, perteneciente a la empresa demandada.

Se precisa igualmente que no le asiste razón al apoderado de la parte demandada cuando indica en el recurso interpuesto que los testigos no fueron contundentes, refiriendo que los dos testimonios de las dos señoras eran testimonios que comunicaban lo que sabían de boca de la demandante, sin que ello sea cierto pues las señoras NORELA DEL SOCORRO CASTRILLON MEJÍA y CLEMENCIA RIVERA MONTAÑO, tenían conocimiento de los hechos objeto del litigio en virtud de que estas compraron un apartamento en la unidad donde se ejecutó el contrato de la demandante y además después de cierto tiempo ocuparon dicho apartamento y observaban que la demandante laboraba allí de 07:00 am a 05:30 pm, incluso refiriendo que en algunas ocasiones el horario era más extendido, siendo relevante además mencionar que la señora CLAMENCIA RIVERA tenía un conocimiento incluso más directo de los hechos pues su apartamento quedaba en el cuarto piso de donde podía

observar las oficinas donde ellos llegaban a trabajar y se desplazaban a todas partes.

Por todo lo anterior se concluye que la relación que vinculó a las partes entre el 24 de noviembre de 2014 al 15 de febrero de 2016, fue efectivamente a través de un contrato laboral tal y como se indicó en primera instancia razón por la cual habrá de CONFIRMARSE la sentencia en este punto en particular.

2. De las sanciones moratorias consagradas en el artículo 65 del CPT y SS y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Con relación a la imposición de estas indemnizaciones de forma reiterada la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que su imposición no es automática, por lo que debe el juez abordar en cada caso los aspectos relacionados con la conducta que asume el empleador para sustraerse del pago de las obligaciones laborales (sentencias SL5528 de 2019 y SL5595 de 2019).

Partiendo de lo anterior, observa la sala que no se evidencia mala fe del empleador con respecto al pago de salarios y prestaciones, pues este actuaba con el convencimiento que el contrato celebrado por las partes correspondía a un contrato de prestación de servicios hecho que genera convencimiento a esta Sala de la buena fe en su actuar, precisando además que fue en esta instancia donde se determina que el contrato correspondía a un contrato de trabajo.

3. De la indemnización por despido.

Cuando se trata de la terminación del contrato laboral de forma unilateral y sin justa causa por parte del empleador debe advertirse que, sobre el trabajador recae la carga de demostrar que tal terminación fue atribuible al empleador, esto es, que en efecto el empleador fue quien lo despidió, que fue quien tomó la decisión de terminar el contrato de trabajo, y a este, en el evento en que desee el éxito de su excepción, le corresponde demostrar que el despido se basó en las causas esgrimidas bajo la cual se comunicó la decisión de dar por terminado el contrato laboral, (M. P. Fernando Castillo Cadena). CSJ Sala Laboral, Sentencia SL-17728-2016 (48351), 17/08/16.

Partiendo de lo anterior, siempre que se alegue un despido, la carga de la prueba recae sobre el trabajador, tal y como lo ha expuesto la Corte suprema

de justicia en sentencia 42544 del 28 de mayo de 2014, M.P, Dra, Clara Cecilia Dueñas Quevedo:

*“Aunque lo anterior es suficiente para desestimar el cargo, la Sala precisa que el Tribunal en momento alguno le dio un alcance equivocado al artículo 64 del C.S.T., **en tanto la causa eficiente por la cual el sentenciador de alzada absolvió a la demandada de la indemnización por terminación del vínculo laboral, no fue la interpretación de la citada preceptiva, sino el hecho de no encontrar probado el despido, carga procesal que a la luz del artículo 177 del C.P.C., le correspondía al demandante**, tal y como lo ha repetido esta Sala de la Corte al precisar que en materia de despidos, sobre el trabajador gravita la carga de demostrar que la terminación del contrato fue a instancia del empleador, y a éste, si es que anhela el éxito de su excepción, le corresponde demostrar que el mismo se basó en las causas esgrimidas por él, al momento de dar por terminado el vínculo laboral” (resalto intensional)*

Conforme a lo mencionado, aplicado al caso en concreto se tiene que el demandante no demostró por ningún medio el supuesto despido del empleador pues lo dicho por esta en el interrogatorio de parte y en la demanda, al tenor de lo establecido en el artículo 191 del C.G.P no tiene validez alguna en tanto que el interrogatorio de parte es idóneo en la medida en que sirva para provocar confesión. Además de lo mencionado resulta claro que según los testigos mencionados en el acápite inicial manifestaron con respecto al despido que no saben la razón de la terminación del contrato de trabajo de la demandante. Así por ejemplo expresó la señora NORELA DEL SOCORRO CASTRILLON MEJÍA que **le contaron** que a la demandante la habían despedido sin darle explicaciones y más adelante precisó que desconocía la causa de terminación del contrato de Dora y Casagrande.

Al su turno la señora CLEMENCIA RIVERA MONTAÑO dijo que **no sabe** porque la demandante dejó de trabajar en el edificio San Ángel, refiriendo además que **Dora le dijo** muy sorprendida que la habían dejado sin trabajado, y que además ella **se imaginaba** que era porque se dio cuenta que le estaban envoltando su dinero y eso no les gusto a ellos.

Como puede verse las testigos mencionadas, contrario a lo manifestado por el apoderado de la parte demandante no tiene un conocimiento directo de la razón de la terminación del contrario de la demandante, razón por la cual, al no encontrarse demostrado el despido no hay lugar a la indemnización por despido injusto solicitada.

En virtud de todo lo expuesto lo legal y pertinente será CONFIRMAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Laboral del Circuito de Bello Antioquia.

Sin costas en esta instancia

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia emitida por el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, por las razones argumentadas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Las anteriores decisiones se notifican en ESTADOS



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 098 del 08 de junio de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>